

**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA**

Bogotá, D.C., 20 ABR 2020
1110-410400000 E-2026-195318 P-2026-4316653- (Cítese al contestar)
Oficio n°. 04 605

Doctor

PEDRO PABLO SALAS HERNÁNDEZ

Director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
Ministerio del Interior
pedro.salas@mininterior.gov.co

Doctor

ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA

Subdirector Técnico de la Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa
Ministerio del Interior
servicioalciudadano@mininterior.gov.co; alfonso.jimenez@mininterior.gov.co

Doctor

OSCAR FLÓREZ MORENO

Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno
Agencia Nacional de Infraestructura
contactenos@ani.gov.co

Asunto: Solicitud de información trámite - ***“Derecho de petición – Garantía y protección del derecho fundamental a la consulta previa”*** elevada por el ciudadano DAVID MARTÍNEZ CANTILLO, CC de Comunidades Negras Bajo Polo de Rotinet, en el municipio de Repelón, Atlántico.

Respetados funcionarios, cordial saludo.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos inició actuación preventiva en atención a la solicitud de la referencia, elevada por el ciudadano David Martínez Cantillo, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Bajo Polo de Rotinet, en el municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico, por la presunta violación a sus derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación con ocasión del Proyecto *“Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”* a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, concesionado a la empresa Ecosistemas del Dique S.A.S, de la Compañía Sacyr Concesiones.

Se refieren en su oficio a la afectación directa e impactos generados con ocasión del proyecto ambiental en mención y destacan, entre otras, las siguientes preocupaciones:

“...la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) actualmente viene adelantando la revisión de la solicitud de determinación de procedencia de la Consulta Previa presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario Ecosistemas del Dique, en cumplimiento de la orden emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)...

La ANLA, al analizar la complejidad técnica, ambiental y social del proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, determinó que el Plan Hidrosedimentológico no constituía un instrumento ambiental suficiente ni equivalente a una licencia ambiental, razón por la cual ordenó a la ANI y al Concesionario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), al considerar que, debido a la magnitud del proyecto, sus impactos acumulativos, su alcance territorial y su incidencia sobre ecosistemas estratégicos y comunidades étnicas, el único instrumento ambiental válido para su evaluación y ejecución es la licencia ambiental.

En consecuencia, la ANI y el Concesionario se vieron obligados a presentar una nueva solicitud de determinación de procedencia de la consulta previa ante la DANCP, en atención a que la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental implica una nueva evaluación del área de influencia, de los impactos socioculturales, económicos y ambientales, y de la presencia de comunidades étnicas potencialmente afectadas...

...Las comunidades del departamento del Atlántico, particularmente las ubicadas en el sur del departamento, fueron históricamente las más afectadas por el fenómeno de La Niña del año 2010–2011, evento que provocó el desbordamiento del Canal del Dique, la ruptura de jarillones, la inundación masiva de territorios, la destrucción de viviendas, cultivos, ecosistemas y medios de vida, así como la pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de comunidades enteras.

En ese contexto, resulta incomprensible que desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio del Interior se pretenda desconocer el nivel de afectación histórica que han sufrido las comunidades del Atlántico, quienes han soportado durante décadas los impactos de la dinámica hidráulica del Canal del Dique, sin que se les haya garantizado una participación efectiva en los procesos de planificación, intervención y restauración del ecosistema”.

Igualmente, expresan su preocupación por el trámite de la solicitud de procedencia elevada por el ejecutor del proyecto ante la Dirección Nacional de Consulta Previa y el posible riesgo o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales en mención, por lo que solicitan la actuación preventiva y acompañamiento institucional, particularmente de los entes de control.

Ante el panorama descrito en su memorial, elevan solicitudes, entre otras, ante el Ministerio del Interior Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, competente para atender de fondo las inquietudes, preocupaciones expuestas por la comunidad étnica y emitir pronunciamiento sobre la determinación de procedencia de consulta previa con ocasión del referido proyecto y garantías de participación conforme a sus competencias constitucionales y legales, concretando en su memorial las siguientes peticiones:

"1. A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, ejercer vigilancia preventiva, control institucional y seguimiento permanente al proceso de determinación de procedencia de la consulta previa que adelanta la DANCP, ante el riesgo de exclusión de nuestra comunidad y de otras comunidades étnicas del departamento del Atlántico, garantizando que el proceso se desarrolle con transparencia, rigor técnico y respeto por los derechos fundamentales.

2. A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, activar mecanismos de protección preventiva de los derechos fundamentales de la comunidad, especialmente el derecho a la consulta previa, al territorio, a la participación, a la igualdad y al debido proceso administrativo, frente a la posible limitación del proceso únicamente a comunidades marítimas y la presunta ausencia de visitas de verificación en territorio.

3. A la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de la comunidad, mediante la realización de un análisis técnico, jurídico, social y territorial independiente, riguroso e integral de la nueva solicitud de procedencia, que incluya necesariamente visitas de verificación en territorio y el reconocimiento de las dinámicas económicas, culturales, bioculturales y ecosistémicas de la comunidad.

4. A la DANCP, asegurar que el área de influencia socioeconómica y territorial del proyecto sea evaluada de manera integral, en concordancia con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente en el marco del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), evitando cualquier exclusión injustificada de comunidades étnicas que mantienen una relación histórica y directa con el sistema del Canal del Dique y los ecosistemas lagunares conexos.

5. A la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la DANCP, adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la inclusión efectiva de la comunidad en el proceso de determinación de procedencia de la consulta previa, protegiendo sus derechos fundamentales y evitando decisiones regresivas que desconozcan las afectaciones históricas sufridas por las comunidades del sur del Atlántico, especialmente las derivadas del fenómeno de La Niña 2010-2011 y de la dinámica hidráulica del Canal del Dique.

6. A las entidades de control, ejercer un seguimiento riguroso, oportuno y permanente al proceso administrativo en curso, con el fin de evitar que se valide un área de influencia

restringida que omita los impactos reales del proyecto sobre las comunidades ribereñas, pesqueras, agrícolas y lagunares del Atlántico, garantizando la aplicación de los principios de prevención, precaución, participación efectiva y protección de comunidades étnicas..."

Conforme a la misionalidad de esta dependencia de la Procuraduría, de cara a la garantía de derechos de los pueblos étnicos y en atención a la petición objeto de seguimiento, nos permitimos solicitar:

1. Indicar si el proyecto "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE" cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental Integral requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en el marco del trámite licenciatorio. En caso afirmativo, por favor señalar i) si fue puesto a disposición de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – Subdirección Técnica y ii) si hace parte este Estudio de Impacto Ambiental Integral del expediente contentivo de la actuación administrativa de la Autoridad Nacional de Consulta Previa-Subdirección Técnica para la determinación de procedencia de la consulta previa con el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Bajo Polo de Rotinet y con las demás comunidades que argumentan la posible afectación directa con el desarrollo del proyecto.
2. Informar de manera detallada las acciones, gestiones o actuaciones adelantadas en el marco del presente asunto para acopiar la información necesaria y requerida para la emisión del pronunciamiento que en derecho corresponda, de cara a la garantía efectiva y/o prevención de riesgo o vulneración de los derechos reconocidos y protegidos especialmente a los pueblos étnicos.
3. Informar acerca del trámite impartido a la petición en referencia y allegar copia de esta, así como de la documentación que la soporte.
4. Promover de manera coordinada y articulada el diálogo y acercamiento entre la comunidad interesada y el ejecutor del proyecto en cita; en tal sentido se solicita la generación de espacios de diálogo y escucha intercultural con los diferentes actores institucionales, comunidad negra del Consejo Comunitario interesado, hoy peticionario, el ejecutor del proyecto y el Ministerio Público, que permitan una mayor aproximación al sentir comunitario con ocasión del proyecto, hacer claridades y precisiones, superar diferencias y/o situaciones, así como generar compromisos, si el caso lo requiere, de cara a la garantía efectiva de los derechos reconocidos y protegidos constitucionalmente.

5. Comunicar a esta Procuraduría Delegada la programación de reuniones o diligencias en el asunto, así como noticiar las decisiones que se adopten si a ello hubiere lugar, a fin de asegurar el acompañamiento institucional, de acuerdo con la misionalidad de este organismo de control.

Agradecemos su respuesta dentro del término de **cinco (5) días hábiles**, allegando la documentación que la soporte, la cual podrá ser remitida a través de la sede electrónica en el enlace <https://sedeelectronica.procuraduria.gov.co> y el correo electrónico mpolo@procuraduria.gov.co.

Para mayor ilustración, adjuntamos copia de la citada petición.

La presente solicitud se formula en ejercicio de las funciones de vigilancia preventiva y control de gestión asignadas a esta Procuraduría Delegada mediante la Resolución 377 de 2022, conforme lo establecido en el Decreto Ley 262 de 2000.

De ustedes, atentamente,


JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE
Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos

Anexo: Lo anunciado.
Copias a: Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Atlántico
Defensoría del Pueblo Nacional y Regional del Atlántico.
Peticionario. Sr. David Martínez Cantillo. Consejo Comunitario Bajo Polo de Repelón.
Proyectó: Marta Cecilia Polo Orozco, Profesional Universitario.

lr

